

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO: 1148
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2015-00428-00
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO SINGULAR
EJECUTANTE: BLANCA ELVIA CIFUENTES RODRÍGUEZ
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: Resuelve objeciones a liquidación del crédito

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Se procede a determinar la liquidación del crédito contenido en la sentencia dictada por este juzgado el 4 de septiembre de 2009 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2006-00145-00, en el cual actuó como demandante la señora Blanca Elvia Cifuentes Rodríguez y como demandada la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, providencia en virtud de la cual se ordenó re-liquidar la pensión gracia de la actora, teniendo en cuenta, además de la asignación básica, la prima de vacaciones y la prima de navidad, con efectos fiscales a partir del 31 de enero de 2003, y se dispuso el pago indexado de lo adeudado y de los intereses en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CCA. (fls. 17 a 25).

Mediante auto del 2 de septiembre de 2015 se dispuso seguir adelante con la ejecución en los términos contenidos en el mandamiento de pago librado el 12 de junio de 2015 y se ordenó a las partes que presentaran la respectiva liquidación del crédito (fl. 68).

A través de escrito radicado el 29 de septiembre de 2015, el apoderado de la parte ejecutante allegó la liquidación del crédito por \$28'193.325 por concepto de intereses moratorios causados entre el 18 de septiembre de 2009 y el 31 de agosto de 2015 sobre un capital de \$24'544.430, aplicando un pago parcial o abono por este mismo valor a intereses moratorios con arreglo al artículo 1653 del Código Civil (fls. 69 a 71).

Dentro del término de traslado previsto en el artículo 446 del CGP, el apoderado de la parte ejecutada objetó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, sin aportar una liquidación alternativa, y manifestó que el pago de los intereses reclamados no puede ser asumido por la UGPP porque están a cargo del PAR Cajanal o, en su defecto, del Ministerio de Salud y Protección Social, por haber asumido los pasivos de esta especie, y adicionalmente adujo que no es viable aplicar las reglas de imputación de pagos previstas en el artículo 1653 del Código Civil (fls. 74 a 77).

Mediante proveído del 29 de abril de 2016, el juzgado dispuso enviar el expediente a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá para que elaborara la liquidación del crédito con base en las pautas allí indicadas, entre ellas las previsiones de los artículos 1649 y 1653 del Código Civil y 177 y 178 del Decreto 01 de 1984, la cual ascendió a la suma de \$33'343.901 para el período comprendido entre el 18 de septiembre de 2009 y el 18 de mayo de 2016 (fls. 88 a 91).

En este orden, se desestimará la objeción relativa al sujeto que debe asumir el pago de la condena de intereses moratorios ordenada en la sentencia objeto de ejecución, habida cuenta que la parte ejecutada no planteó ese reparo en ninguna de las etapas procesales

anteriores, unido a que el numeral 2 del artículo 446 del CGP ordena que solo podrán formularse objeciones sobre el estado de cuenta, amén de que la Directora de Servicios Integrados de Atención de la UGPP, mediante oficio del 18 de junio de 2021, remitido a este juzgado por correo electrónico el 28 de julio de 2021, allegó la Resolución No. SFO 000809 del 17 de junio de 2021, en virtud de la cual la Subdirectora Financiera de la UGPP ordenó el gasto y pago por concepto de intereses moratorios a la señora Elvia Blanca Cifuentes Rodríguez por la suma de \$2'954.033,97, en cumplimiento de la sentencia que sirve de título ejecutivo en el presente proceso, de modo que tal objeción deviene notoriamente improcedente.

En cuanto a la segunda objeción, se estudiará en seguida y se modificarán las liquidaciones aportadas por la parte ejecutante y la Oficina de Apoyo, habida cuenta que presentan inconsistencias jurídicas y contables.

En el presente caso no se persigue la cancelación del capital indexado, sino únicamente los intereses moratorios causados desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia objeto de ejecución (18 de septiembre de 2009) hasta la fecha de pago de las diferencias pensionales reliquidadas adeudadas (25 de noviembre de 2011¹), por lo que la liquidación se limitará a esa acreencia.

Al respecto, tal como lo definió la Corte Constitucional² al declarar la inexecutable parcial del inciso 5 del artículo 177 del CCA, las cantidades líquidas reconocidas en sentencias de condena contra entidades públicas, devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria y, adicionalmente, el inciso siguiente del mismo precepto, precisa que *"Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma"*.

De acuerdo con la Resolución No. UGM 002980 del 3 de agosto de 2011, por la cual se re-liquidó la pensión de jubilación gracia de la señora Blanca Elvia Cifuentes Rodríguez, en cumplimiento de la sentencia dictada el 4 de septiembre de 2009, que sirve de título ejecutivo en el presente proceso, ejecutoriada el 17 de septiembre de 2009, (fls. 22 a 29), el apoderado de la ejecutante presentó solicitud de cumplimiento de dicha providencia el 3 de noviembre de 2009, es decir, dentro de los seis (6) meses siguientes, de modo que se cumplen los supuestos fácticos y jurídicos para proceder a la liquidación de los intereses moratorios, y para ello se tomará como capital el valor pagado por la entidad ejecutada el 25 de noviembre de 2011 a título de diferencias pensionales derivadas de la re-liquidación pensional con la inclusión de los factores salariales adicionales, que fue de \$24'544.430.

Ahora bien, es necesario memorar que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999, declaró inexecutable las expresiones *"durante los seis meses siguientes a su ejecutoria"* y *"después de este término"* contenidas en el artículo 177 del CCA, lo cual significa que los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación de los 18 meses para que la condena sea ejecutable ante la jurisdicción.

De la jurisprudencia en cita y la interpretación armónica de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, puede entenderse que las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia, siempre cuentan con el plazo de 30 días, contados desde su comunicación, para adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, y en dicho plazo se deben cancelar intereses comerciales y no moratorios, pues no de otra manera se podría compaginar el mandato del artículo 176 con la previsión del artículo 177, después de la declaratoria de inexecutable de las expresiones arriba aludidas, ya que no tendría sentido lógico que el legislador le conceda a las entidades el

¹ Fecha del pago parcial.

² Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente D-2191, Sentencia C-188 del 24 de marzo de 1999, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

término de 30 días para que acaten el fallo y a su vez se les conmine con el pago de intereses resarcitorios.

Sobre esta tesis, se advierte que, si bien en anteriores decisiones este juzgado calculaba intereses comerciales remuneratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta por el término de treinta (30) días, según la interpretación indicada anteriormente y el criterio fijado por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 4 de febrero de 2016, Exp. 25000-23-27-000-2009-00233-01 (18551), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, se cambiará tal postura con fundamento en la decisión proferida el 24 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en un caso análogo³ tramitado por este juzgado y acogerá el criterio decantado, el cual reconoce los intereses moratorios a partir de la ejecutoria. Veamos:

"Adviértase como la norma transcrita impone a la entidad condenada la obligación de expedir dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia, acto administrativo en el cual disponga sobre su cumplimiento, sin que nada diga respecto al pago de intereses de mora, asunto que se encuentra regulado en el artículo 177 del CCA, así (...)

En la sentencia C-188 la Corte Constitucional declaró inexecutable los apartes subrayados y señaló con claridad que en el caso de condenas judiciales no procede la causación de intereses de plazo o corrientes, y que los de mora comienzan a causarse desde la ejecutoria de la sentencia, así lo expresó (...)

Así las cosas entiende la Sala que el término de 30 días que concede el artículo 176 del C.C.A lo es para que la entidad tome las medidas administrativas para el cumplimiento del fallo, sin que ello modifique o cambie la generación de intereses de mora que se da desde la ejecutoria de la sentencia título de recaudo por lo cual en este aspecto habrá de modificarse la sentencia recurrida para indicar que los intereses de mora se causaron desde el 28 de mayo de 2011 día siguiente al de la ejecutoria de la sentencia".

En consecuencia, por concepto de intereses moratorios causados sobre el saldo insoluto desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia (18 de septiembre de 2009) hasta el día anterior al pago del capital (24 de noviembre de 2011), se adeuda un total de \$11'629.014,92, conforme al siguiente cuadro explicativo:

PERIODO		RESOLUCIÓN No.	INTERÉS CORRIENTE MENSUAL	INTERÉS MORATORIO DIARIO	INTERES MORATORIO MENSUAL	NÚMERO DE DÍAS	INTERÉS MORATORIO EFECTIVO ANUAL	CAPITAL ADEUDADO HASTA LA EJECUTORIA	INTERESES MORATORIOS
DESDE	HASTA								
18-sep-09	30-sep-09	937	18,65%	0,06760%	2,07681%	13	27,98%	\$ 24'544.430	\$ 215.703,54
1-oct-09	30-oct-09	1486	17,28%	0,06316%	1,93920%	30	25,92%	24'544.430	465.098,89
1-nov-09	30-nov-09	1486	17,28%	0,06316%	1,93920%	30	25,92%	24'544.430	465.098,89
1-dic-09	30-dic-09	1486	17,28%	0,06316%	1,93920%	30	25,92%	24'544.430	465.098,89
1-ene-10	30-ene-10	2039	16,14%	0,05942%	1,82312%	30	24,21%	24'544.430	437.498,54
1-feb-10	28-feb-10	2039	16,14%	0,05942%	1,82312%	28	24,21%	24'544.430	408.331,97
1-mar-10	30-mar-10	2039	16,14%	0,05942%	1,82312%	30	24,21%	24'544.430	437.498,54
1-abr-10	30-abr-10	699	15,31%	0,05665%	1,73767%	30	22,97%	24'544.430	417.164,12
1-may-10	30-may-10	699	15,31%	0,05665%	1,73767%	30	22,97%	24'544.430	417.164,12
1-jun-10	30-jun-10	699	15,31%	0,05665%	1,73767%	30	22,97%	24'544.430	417.164,12
1-jul-10	30-jul-10	1311	14,94%	0,05541%	1,69933%	30	22,41%	24'544.430	408.033,13
1-ago-10	30-ago-10	1311	14,94%	0,05541%	1,69933%	30	22,41%	24'544.430	408.033,13
1-sep-10	30-sep-10	1311	14,94%	0,05541%	1,69933%	30	22,41%	24'544.430	408.033,13
1-oct-10	30-oct-10	1920	14,21%	0,05295%	1,62320%	30	21,32%	24'544.430	389.896,21
1-nov-10	30-nov-10	1920	14,21%	0,05295%	1,62320%	30	21,32%	24'544.430	389.896,21
1-dic-10	30-dic-10	1920	14,21%	0,05295%	1,62320%	30	21,32%	24'544.430	389.896,21
1-ene-11	30-ene-11	2476	15,61%	0,05766%	1,76865%	30	23,42%	24'544.430	424.537,51
1-feb-11	28-feb-11	2476	15,61%	0,05766%	1,76865%	28	23,42%	24'544.430	396.235,01

³ Expediente 2016-00110-00. Demandante, Luz Leonor Pereira de Rivera. Demandado, UGPP.

1-mar-11	30-mar-11	2476	15,61%	0,05766%	1,76865%	30	23,42%	24'544.430	424.537,51
1-abr-11	30-abr-11	487	17,69%	0,06450%	1,98060%	30	26,54%	24'544.430	474.934,03
1-may-11	30-may-11	487	17,69%	0,06450%	1,98060%	30	26,54%	24'544.430	474.934,03
1-jun-11	30-jun-11	487	17,69%	0,06450%	1,98060%	30	26,54%	24'544.430	474.934,03
1-jul-11	30-jul-11	1047	18,63%	0,06754%	2,07482%	30	27,95%	24'544.430	497.304,12
1-ago-11	30-ago-11	1047	18,63%	0,06754%	2,07482%	30	27,95%	24'544.430	497.304,12
1-sep-11	30-sep-11	1047	18,63%	0,06754%	2,07482%	30	27,95%	24'544.430	497.304,12
1-oct-11	30-oct-11	1684	19,39%	0,06997%	2,15030%	30	29,09%	24'544.430	515.211,57
1-nov-11	24-nov-11	1684	19,39%	0,06997%	2,15030%	24	29,09%	24'544.430	412.169,26
								INTERESES MORATORIOS A 24/11/2011	\$11'629.014,92

En tal escenario, a 24 de noviembre de 2011 se adeudaba por concepto de capital (diferencias pensionales de la reliquidación) la suma de \$24'544.430 y por intereses moratorios \$11'629.014,92, para un total de \$36'173.444,92, monto frente al cual se hizo un pago parcial por \$24'544.430.

Sobre el particular, en ocasiones anteriores el juzgado consideraba que al tenor del artículo 1653 del Código Civil los abonos o pagos parciales debían imputarse primero a intereses y luego a capital, posición que no ha sido pacífica, toda vez que en algunas interpretaciones se ha considerado que en lo concerniente a los procesos ejecutivos se deberá acudir a lo preceptuado en ordenamientos aplicables a las relaciones entre los particulares y el Estado, por lo que la teleología de lucro que gobierna las relaciones de carácter civil dista de la función administrativa que propende por la satisfacción del interés general y en cuyo marco se desenvuelve incluso la satisfacción de las obligaciones a cargo del Estado.

Lo anterior con fundamento en recientes sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pregonan la tesis de que el artículo 177 del CCA regula la materia y por tanto no es dable acudir a dicho precepto del estatuto civil, entre ellas la proferida el 20 de octubre de 2020 por la Subsección E de la Sección Segunda, en el expediente 2015-00737-01, M.P. Dra. Patricia Victoria Manjarres Bravo (proceso ejecutivo conocido en primera instancia por este juzgado), la cual sobre tal tópico concluyó lo siguiente:

“Finalmente y habida cuenta que la parte ejecutante solicitó que se dé aplicación a la imputación de pagos prevista en el artículo 1653 del Código Civil -pretensión acogida por el juez de primera instancia al momento de seguir adelante con la ejecución-, habrá de señalarse que, en criterio de la Sala, dicha aplicación resulta improcedente en la medida que el Decreto 01 de 1984 previó de manera expresa los alcances económicos del cobro de un título ejecutivo en el artículo 177 ibídem. Luego, es posible concluir que el estatuto contencioso administrativo dispuso como debía hacerse el pago de las obligaciones derivadas de sentencias judiciales a cargo del Estado, razón por la cual, ab initio, no hay lugar a remitirse a la regulación del Código Civil, que regula las obligaciones entre particulares.

Ahora, es de resaltar que si bien es cierto el H. Consejo de Estado ha aplicado el art. 1653 del Código Civil en procesos ejecutivos derivados de contratos estatales ¹⁴, también lo es que mientras en ese escenario se está frente al cumplimiento de una obligación contenida en un título diferente al que hoy se analiza, de naturaleza bilateral y, de contera, con aplicación del principio de autonomía de la voluntad, que eventualmente permite traer a colación figuras reguladas en el estatuto civil, en el asunto de marras, se está frente a la ejecución de una sentencia judicial, que condenó a la entidad a la reliquidación de una mesada pensional, situación que además de involucrar el sistema pensional, implica la ejecución de una providencia que tiene regulación en el código contencioso administrativo y no de un contrato

En virtud de lo expuesto, la Sala acoge el argumento del recurso de apelación propuesto por la parte ejecutada, según el cual no es posible realizar la imputación de pagos prevista en el artículo 1653 del Código Civil, razón por la cual precisa que el pago efectuado por la entidad no se imputará primero a intereses ni podrán calcularse nuevos intereses sobre los valores que se fijan en esta providencia salvo los que se causen sobre los nuevos montos que se generen”.

En acatamiento a esa hermenéutica del Tribunal, el Juzgado ha venido acogiendo esa postura y, por tanto, los abonos o pagos parciales a las obligaciones pensionales que se reclaman, sirviéndose de una sentencia como título ejecutivo, se aplican directamente a capital y no a intereses, con base en el artículo 177 del CCA, y deja de aplicar el artículo 1653 del Código Civil, de manera que en este caso también hay una variación con respecto a las liquidaciones del crédito que aplicaron ese abono a intereses, de tal modo que en esta sentencia se recoge esa tesis y, por contera, se aplica ese abono a capital.

Así las cosas, se imputará el abono de \$24'544.430 a capital, arrojando como suma insoluta \$11'629.014,92, valor sobre el cual no es viable liquidar nuevos intereses porque se incurriría en anatocismo, figura proscrita por el ordenamiento interno, pues no es dable liquidar intereses sobre intereses.

Con todo, se observa que la autoridad ejecutada aportó la Resolución No. SFO 000809 del 17 de junio de 2021, mediante la cual se ordenó un gasto y pago por concepto de intereses moratorios a favor de la señora Blanca Elvia Cifuentes Rodríguez por valor de \$2'954.033,97 (fls. 165 y 166); no obstante, no se aportó documento alguno que dé cuenta del desembolso efectivo de esa suma de dinero o de cualquier otra, por lo que no se tendrá como un pago parcial adicional.

Finalmente, se conminará a las partes para que, en cada caso, adelanten sin demora las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la presente providencia, en especial al representante legal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, habida cuenta que el inciso 7 del artículo 192 y el parágrafo 1° del artículo 195 del CPACA advierten perentoriamente a las autoridades sobre la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial que acarrea el incumplimiento de las disposiciones sobre los créditos judicialmente reconocidos.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

PRIMERO: Modificar el monto de las liquidaciones del crédito, la primera presentada por el apoderado de la parte ejecutante y la segunda elaborada por la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá y, en su lugar, fijarla en once millones seiscientos veintinueve mil catorce pesos con noventa y dos centavos (\$11'629.014,92) m/cte.

SEGUNDO: Conminar a las partes para que, en cada caso, adelanten sin demora las gestiones pertinentes a fin de dar cumplimiento a la presente providencia, en especial, al representante legal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, habida cuenta que el inciso 7 del artículo 192 y el parágrafo 1° del artículo 195 del CPACA advierten perentoriamente a las autoridades sobre la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial que acarrea el incumplimiento de las disposiciones sobre los créditos judicialmente reconocidos.

TERCERO: En firme este proveído, envíese copia de esta decisión al representante legal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

CUARTO: Cumplido lo anterior, regresen las diligencias al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

JCRC